

Reconstitución del Islam político libio en un contexto de revuelta

Laura Feliu

Revisado: 05 de noviembre de 2013

Aceptado: 16 de diciembre de 2013

Resumen

El estallido de la revuelta contra el régimen de Muammar Gaddafi en febrero de 2011, la posterior guerra civil y los procesos legislativo y constituyente ulteriores han permitido a los islamistas ocupar el espacio público, reconstruir sus bases y completar su proceso de elitización. Los sectores islamistas se han unido al proceso de reconstrucción del sistema político, tanto a través de la participación en las elecciones, como en las instituciones de nueva creación. A diferencia de otros países de la región, los partidos islamistas no han logrado convertirse en la primera fuerza política. Sin embargo, constituyen un eje ideológico particularmente importante. Asimismo, los acontecimientos vinculados a la revolución del 17 de febrero han confirmado la heterogeneidad del fenómeno que se oculta bajo la etiqueta común de islam político.

Palabras clave: Islam Político, Libia, Primavera Árabe, Elecciones, Sistema Político

Abstract

The outbreak of the revolt against the regime of Muammar Gaddafi in February 2011, the subsequent civil war, and the ulterior legislative and constituent processes have enabled Islamists to initiate a process of emergence in the public space, rebuilding its bases and gentrification. The Islamist sectors have joined the process of rebuilding the political system, participating in the elections and in the newly created institutions. Unlike other countries in the region, Islamist parties fail to become the first political force in the country. However, they have become a particularly important ideological axis. These events have proved the heterogeneity of the phenomenon grouped under the common label of political Islam.

Keywords: Political Islam, Libya, Arab Spring, Elections, Political System.

Introducción

La represión y la acaparación de recursos durante el gobierno de Gaddafi (1969-2011) provocaron el exilio o la desmovilización de los aspirantes a constituir la clase política libia.

Debe recordarse que dada la oclusión del sistema político durante el período de la Yamahiriya y la neutralización de toda oposición interna, solo en el exilio era posible un cierto grado de formalización. Por otra parte, los sectores islamistas no formaron parte de las élites primarias o secundarias como grupo durante la Yamahiriya, si bien su ideología se encontraba presente en sectores del ejército (aparentemente no entre la oficialidad), en ciertas élites secundarias regionales y tribales, y en una pequeña parte de la débil burguesía creada durante el período revolucionario y en plena transformación tras el acceso a los negocios privados a partir de los años noventa. El resultado fue que en Libia no se articuló durante el Gobierno revolucionario liderado por Muammar Gadafi un gran movimiento islamista con capacidad de representación de una mayoría de la población (Deeb, 1996: 187). Los resultados de las elecciones de 2012 y la formación del Gobierno posterior no han permitido a los sectores islamistas el control del Gobierno, pero sí ha convertido a partidos de esta ideología en actores ineludibles en los procesos de decisión política y ha mostrado la heterogeneidad del fenómeno agrupado bajo la etiqueta común de islamismo.

En el margen han quedado pequeños grupos adscritos al salafismo, que rechazan la vía democrática como vía adecuada. El presente artículo analiza, en primer lugar, la participación de los sectores islamistas en las revueltas tomando como punto de partida su debilidad sobre el terreno y la ausencia de control de recursos estratégicos. En segundo lugar se diferencia entre aquellos grupos que han optado por participar en el juego político a través de la competición en las diferentes elecciones y aquellos que rechazan las reglas del juego. Por último se analiza el desarrollo de programas y políticas por parte de los sectores adscritos al islam político, tanto a través de instituciones y canales oficiales como en otros contextos.

Los islamistas en el corazón de las revueltas de 17 de febrero

Los sectores islamistas tuvieron un papel relevante en las revueltas populares de 2011 en Libia y en el conflicto armado que se cierra con la caída de Trípoli y el asesinato de Gadafi el 20 de octubre del mismo año. Debe recordarse que en aquellos momentos los grupos políticos asociados al islam político no estaban legalizados, ni tampoco les era permitido un espacio de organización informal. En Libia los partidos políticos nunca tuvieron una verdadera raigambre (Takeyh, 2000), y con la llegada del régimen revolucionario y la creación de la Yamahiriya en 1977, estos fueron prohibidos, y cualquier intento de organización fue reprimido con dureza; una parte importante del movimiento tuvo que optar por el exilio, mientras numerosos militantes ingresaron en prisión.

Dos eran las principales tendencias del islam político en Libia. Por una parte, los Hermanos Musulmanes (HM) libios se crearon en los años cincuenta con la llegada al país de un grupo de militantes, entre ellos una figura clave: el egipcio Ezzadín Ibrahim Mustafá, que encontraron refugio político en la Libia de Idris I (Pargeter, 2005), y de profesores egipcios que fueron reclutados posteriormente por las necesidades de alfabetización de la Libia revolucionaria. Bien pronto se evidenció su posición crítica con respecto al régimen. En 1973 los servicios de seguridad detuvieron a varios de sus miembros, que fueron encarcelados y

torturados. El núcleo central de la organización decidió disolverse, aunque la mayor parte de sus miembros continuaron manteniendo el contacto y crearon el Movimiento de la Alianza Islámica (MAI) en 1974 para promover la enseñanza islámica. A principios de los ochenta miembros de los HM decidieron revitalizar la organización bajo el nombre de Grupo Islámico Libio (GIL), que desde la clandestinidad atrajo a sectores estudiantiles y de la emergente pero débil clase media, y encontró cierto apoyo en el este del país. Su actividad se centró sobre todo en las actividades caritativas y sociales, y la celebración discreta de reuniones anuales. En los noventa miembros asociados al MAI abandonaron este grupo por diferencias relativas a la organización, y algunos de ellos se radicalizaron pasando a militar en el Grupo Combatiente Islámico Libio (GCIL).

Por otra parte, la genealogía del salafismo yihadista está directamente vinculada con el ya citado y extinto GCIL, que se organizó como continuación del grupo clandestino Yihad Islámica, creado en 1982 bajo el liderazgo de Awatha al-Zuwawi, un estudiante de Derecho Islámico de la Universidad de Trípoli que viajó posteriormente a Afganistán en 1986. El grueso de sus militantes luchó en Afganistán en los ochenta y posteriormente o bien siguió el periplo internacional del islamismo combatiente, o se exilió a países europeos (principalmente al Reino Unido), o bien alimentó el conflicto violento centrado en la Cirenaica en el segundo lustro de los noventa. Estos recorridos se superpusieron en muchos casos. Tras el paso por Afganistán, Pakistán y posteriormente Sudán, a mediados de 1995 el régimen libio consiguió que Sudán expulsase a los miembros del grupo islamista del país. Una parte importante de los militantes libios regresaron a Libia y alimentaron las acciones guerrilleras en la región de Bengasi, especialmente en el territorio montañoso de Yebel al-Ajdar. Entre 1995 y 1998 se calcula que el GCIL contaba con 2 500 miembros entre sus filas, con una media de edad de 30 años. En 1996 el conflicto escaló con rapidez y se sucedieron los atentados fallidos contra el propio Gadafi. La respuesta del régimen fue masiva, produciéndose decenas de detenciones y ataques con todo tipo de medios a los supuestos feudos del grupo (Zoubir, 2008).

La represión feroz tanto del islamismo moderado como del salafismo yihadista, los reveses militares sobre el terreno, y la propia evolución del movimiento a nivel global conducen hacia una mayor templanza de estos sectores. Miembros de los HM, del GCIL, y de otros grupúsculos entablan negociaciones con las autoridades entre 2008 y 2011, lideradas por el hijo de Gadafi y su delfín, Saif al-Islam, a través de la Fundación Gadafi. Como resultado, los líderes islamistas aceptan las condiciones vinculadas a su desmovilización y a su renuncia a la lucha armada. El acuerdo no se traduce en una posibilidad de pasar a formar parte de las élites secundarias (Izquierdo-Brichs y Lampridi-Kemou, 2012); los procesos de cooptación son muy limitados. Este hecho explica la opción, sin titubeos, por la revuelta.

La revuelta se inicia como una protesta popular en la ciudad de Bayda por el retraso en la construcción de viviendas y la corrupción que lo ha provocado. De la Cirenaica la rebelión se extiende a otras ciudades del país, escalando muy rápidamente en sus demandas, espoleada por la violenta represión policial. El hecho simbólico que marca el calendario de la revuelta es el arresto el 15 de febrero en Bengasi del abogado Fethi Tarbel que defiende a las familias de los centenares de víctimas, mayoritariamente islamistas, de la masacre acontecida en la prisión de Abu Salim en 1996.¹

El Consejo Nacional de Transición (CNT) liderado por Mahmud Yibril y establecido el 27 de febrero, pocos días después de que se iniciaran las revueltas, reúne sectores de diferentes tendencias políticas, entre ellos a miembros de los Hermanos Musulmanes (como Abdulá Shamia, a cargo de la cartera de Economía). Hay que tener en cuenta que el levantamiento popular tiene una base territorial muy diferenciada, y sigue diferentes lógicas en diferentes regiones y localidades, en un país en el que el elemento tribal sigue siendo determinante. La mayoría de los científicos sociales que han estudiado el sistema político libio consideran que es una estructura de relaciones tribales solo en parte encuadrada por las estructuras del Estado (Davis, 1990; El Khikha, 1997; Anderson, 1990). Esta debilidad de las estructuras institucionales y estatales influye en los procesos de formalización de redes sociales y políticas, mientras que también aumenta la importancia de las redes informales asociadas a lazos familiares. Aunque el levantamiento popular contra el régimen de Gadafi es de naturaleza transversal (Al-Tir, 2011, citado por Sawani, 2012), tanto la geografía de las revueltas, como la composición del Consejo Nacional de Transición o los conflictos a nivel local y regional han demostrado la importancia de la representación y la lealtad tribales. El pueblo libio todavía se siente vinculado a sus raíces tribales (Chersstich, 2011). A pesar del rápido progreso de una sociedad rural a una sociedad abierta (más del 80 % de la población vive ahora en áreas urbanas), la «tribalización» de las ciudades es un hecho. Hasta cierto punto, la distribución del poder en Libia depende de equilibrios familiares, tribales y regionales en los que las estructuras de poder formales e informales se superponen (Mattes, 2008). Debe recordarse que tanto la vieja monarquía libia, como con anterioridad el estado de Awlad Muhammad en el Fezzán entre los ss. XVI-XIX; o la efímera República Tripolitana 1918-1924 (Ahmida 1994), basaron su legitimidad política en las conexiones tribales. Durante la última etapa de la Yamahiriya el régimen pretendió legitimarse sobre una nueva red de alianzas tribales. Debe recordarse al respecto que las élites primarias en Libia se articularon durante el período revolucionario alrededor de un centro de poder muy restringido en torno a Gadafi y a un pequeño grupo de personas en el que su familia fue ocupando progresivamente un espacio más central (y no alrededor de un Estado, como recuerdan Daguzan y Moisseron, 2001: 79). En realidad, el eje formal del poder regulado por ley (el eje popular) ocupaba una posición secundaria con respecto al eje informal no oficial (el eje revolucionario); el ejecutivo formal no controlaba al sector revolucionario. Las instituciones populares seguían un esquema piramidal de congresos y de estructuras administrativas en continuo cambio que permitían encuadrar a una parte de la población, a la que se sumaban funcionarios y tecnócratas con cierta lógica de equilibrio regional y tribal (Obeidi, 2008). En este sistema dual, la columna vertebral del sistema estaba formada por las instituciones revolucionarias dirigidas directamente por Gadafi tanto en el campo securitario (los comités revolucionarios, los aparatos de seguridad)² como de gestión del capital (Compañía de Petróleo Nacional Libia, NOC; Autoridad de Inversión Libia, LAFICO). El propio Gadafi ejercía el poder sin ocupar un puesto fijo en la estructura institucional formal. En 1998, ante el desgaste de la legitimidad revolucionaria y la amenaza de los grupos armados adscritos al islam político en la Cirenaica, este esquema se modificó ligeramente con la apertura política y económica, comportando un mayor pluralismo de los actores presentes (Jurado, 2012). Desde enero de 2000 entró en funcionamiento una nueva política administrativa de carácter descentralizado con la creación de 26 distritos regionales (*cha'biyates*) y el empoderamiento de ayuntamientos y de ciertas tribus, que debían pasar a

ocuparse de la gestión integral del territorio, incluso de la seguridad en detrimento de los comandos revolucionarios. En las principales ciudades se crearon asociaciones tribales como sistema de control de estas agrupaciones. En realidad, la descentralización fue ficticia, y la capacidad de decisión siguió concentrada en Gadafi y su entorno cercano. Estas instituciones actuaron como mecanismos de cooptación de personalidades locales que pertenecían a una generación mayor que los miembros de los comités revolucionarios (Ouanes, 2000).

Hoy en día la relación entre política y tribalismo sigue siendo estrecha. El factor tribu ha sido vital en la estrategia de Yibril para la creación de la Alianza de Fuerzas Nacionales (AFN), y por lo tanto en la victoria en las elecciones al Consejo General de la Nación (CGN) en julio de 2012. Sin duda, esta lealtad tribal sigue teniendo también importancia para el islamismo, especialmente si se observa su fortaleza en determinados territorios (como el este del país, donde se encuentran las tribus Zuwaya, Beni Salim o Awagir).

Ahora bien, grupos adscritos al islamismo se encuentran presentes en prácticamente todas las brigadas combatientes del conjunto del país, en algunos casos dirigiéndolas. Es el caso de los sectores salafistas. El exdirigente del GCIL, Abdelhakim Belhay, es nombrado comandante del Consejo Militar de Trípoli (hasta mayo de 2012), que agrupa a diferentes milicias que toman la capital en agosto de 2011 y que agrupa a unos 25 000 combatientes; Ismail al-Salabi, hermano de uno de los más prominentes líderes religiosos, Ali al-Salabi, dirige la brigada Rafalla al-Shihati en Bengasi, etc. A nivel local los HM también dominan algunas de las coaliciones 17 de febrero (formadas por figuras políticas y miembros de la sociedad civil), como la de Trípoli (Sawani, 2012: 18).

Las revueltas de 2011 suponen una oportunidad para los sectores adscritos al islam político para posicionarse en vistas a la sustitución de las viejas élites, y la ampliación y profundización de la participación en el espacio público. Los islamistas en el país y en el extranjero participan activamente como vanguardia en los levantamientos (relaciones lineales), pero sin llegar a dirigirlos. La convergencia de objetivos (vinculados con la caída del régimen) implica la colaboración entre las diferentes corrientes islamistas, y de éstas con otros sectores político-ideológicos. El apoyo externo, tanto por parte de Estados como de la sociedad civil tiene un gran impacto en la evolución de la revuelta en Libia y en la dinámica posterior de los partidos políticos. La diáspora islamista en países como el Reino Unido, Francia, Egipto o Catar resulta determinante como retaguardia en las acciones de presión sobre el régimen de Gadafi. Debe destacarse en este sentido los vínculos de sectores islamistas libios con las autoridades y servicios secretos británicos, las importantes redes transnacionales tejidas alrededor de los Hermanos Musulmanes, especialmente con Egipto (numerosas figuras islamistas cursan su educación superior en universidades egipcias), y los vínculos con Catar (véase por ejemplo la influencia del carismático jeque Yusuf Al-Qaradawi a través de sus intervenciones semanales en la cadena Al-Jazeera). Todo ello tendrá un impacto relevante en el momento político posterior a la caída de Trípoli en manos de los nuevos revolucionarios.

Los grupos islamistas y la participación en la contienda electoral

Sin duda la estrategia de los diferentes grupos islamistas de participación en las elecciones va a permitir su acceso a recursos de poder que hasta este momento les habían sido vetados. Su participación en las instituciones políticas comporta la continuación de su evolución ideológica. La caída del régimen de Gadafi en octubre de 2011 hace posible el retorno de militantes del exilio y la renovación de las élites. Todo apunta a que el viejo sistema ha sido desmantelado, y que las anteriores élites primarias no han logrado mantener sus posiciones en la estructura de poder (perdiendo el Estado y con ello el control de los importantes ingresos externos derivados del petróleo).

En el proceso legislativo iniciado tras la caída del régimen, los sectores islamistas se encuentran muy presentes pero no logran convertirse en la primera fuerza del país. A ello contribuye el hecho no casual de que en las elecciones del 7 de julio de 2012, de los 200 escaños del Congreso General de la Nación (CGN), 120 asientos están reservados para figuras independientes y 80 para representantes de partidos, lo que sin duda dificulta el control del Parlamento por parte de los partidos más organizados. Más de 2 700 000 libios se registran para votar (85% de los posibles votantes). Poco más de 3 000 personas se presentan como candidatos en las elecciones, de ellos, 2 563 independientes y 649 de partidos políticos. Las personas vinculadas con el régimen derrotado tienen prohibido participar, mientras que una gran proporción de los candidatos son figuras que han liderado la rebelión armada. En poco tiempo 130 partidos son legalizados.

De los 21 partidos que consiguen representación en el Parlamento, 15 obtienen únicamente un escaño, lo que da idea de la fragmentación final del hemicycle, que debe escoger al primer ministro, y aprobar su propuesta de gobierno interino, para luego elegir una asamblea constituyente y organizar las elecciones legislativas. Sin duda el campo ideológico mejor definido es el islamista integrado por los Hermanos Musulmanes y los salafistas; los intereses individuales y las alianzas cambiantes caracterizan la escena (Lacher, 2013 : 6).

El partido que consigue más apoyo es la Alianza de Fuerzas Nacionales (AFN), liderada por el ex primer ministro del gobierno de transición, Mahmud Yibril, e integrada por 58 pequeñas formaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil próximas a sectores laicos y liberales. La Alianza se hace con 39 de los 80 escaños reservados a partidos políticos (48,14%, un 19,5% del total) y obtiene buenos resultados incluso en supuestos feudos del islamismo conservador (es el caso de Bengasi, o de Derna) (Andersen, 2013: 40). Su programa incluye la creación de un Estado civil, la protección de los derechos humanos y la liberalización económica. La AFN ha intentado una estrategia inclusiva, llegando a ofrecer a los islamistas su entrada en la coalición, que fue rechazada con acusaciones del líder religioso Ali al-Salabi de ateísmo contra Yibril.

En el frente liberal, la AFN es seguida en la distancia por el Frente Nacional (FN, 3 escaños, 4,08%), heredero del Frente Nacional para la Salvación de Libia (FNSL), una coalición opositora de gran relevancia durante el gobierno de Gadafi, y que en su inicio en los primeros ochenta incluyó también, entre otros, a figuras cercanas a los Hermanos

Musulmanes. El Frente tras la entrada en el Congreso sigue una política de alianzas cambiantes con parlamentarios independientes.

En cuanto a los sectores islamistas, tres partidos representan la continuidad de las dos principales tendencias del islam político en Libia.³ La primera corriente es la representada por los Hermanos Musulmanes (HM). Esta formación política tuvo que esperar a la caída de Gadafi para realizar, el 17 de noviembre de 2011, su primera reunión pública desde los años cincuenta en la ciudad oriental de Bengasi bajo el liderazgo de Suleimán Abdelkader. El 5 de marzo de 2012 los HM se alían con figuras islamistas moderadas para formar el Partido Justicia y Construcción (PJC) en un acto en el que asisten 1 400 miembros procedentes de 18 localidades. Este grupo confiaba en sacar ventaja de la familiaridad del votante libio con los Hermanos Musulmanes egipcios, su imagen de centralidad en el espectro político, y el efecto de emulación del éxito de sus homónimos en los vecinos Túnez y Egipto. A pesar de ello, el PJC obtiene una alejada segunda posición en los comicios con 17 diputados (21,25% de los partidos, 8,5% del total).

Ahora bien, tanto la AFN como el PJC ejercen una mayor influencia en el Congreso General de la Nación de lo que se infiere de los datos oficiales, ya que una parte de sus miembros se presentan como independientes cuando se considera que esto mejora sus posibilidades de éxito electoral. Otros candidatos independientes menos conocidos son elegidos con su apoyo financiero. Esto lleva a afirmar a Wolfram Lacher (2013: 11) que, incluyendo a sus asociados independientes, la Alianza y la Hermandad Musulmana probablemente representan alrededor de la mitad de los escaños del CGN. Este mismo autor calcula que unos 25 diputados independientes están asociados con la AFN, alrededor de 17 con el PJC (el Partido afirma contar con las simpatías de unos 33 independientes) y, significativamente, unos 23 con diferentes corrientes salafistas (Lacher, 2013: 9).

Las formaciones asociadas a la segunda corriente, el salafismo, consiguen éxitos marginales y ejemplifican la fractura entre dos generaciones asociadas al salafismo. Por una parte encontramos a aquellos grupos que desarrollan una estrategia de inclusión en las instituciones a través de su participación en los comicios (con exiguos resultados). Por otra parte, aquellos grupos que rechazan toda participación en procesos oficiales y poseen una influencia más circunscrita a nivel territorial.

El sector más nutrido del antiguo GCIL crea el Partido Nacional Centrista (Hizb Al-Umma al-Wasat) de Sami Mustafá al-Saadi, considerado el brazo político de GCIL, y que cuenta entre sus miembros a Abdelwahab al-Ghayid (hermano de Abu Yahya al Libi, segundo de Al Qaeda muerto en un ataque). Este partido consigue un escaño. La formación salafista Al-Asala wal bina, que mantiene relaciones estrechas con el gran mufti Sadeq al-Ghariani, si bien no se hace con ningún escaño se calcula que consigue 10 asientos a través de figuras independientes asociadas al movimiento, la mayor parte de ellos en la capital.

La sorpresa es el fracaso del Partido de la Nación (Hizb Al Watan) de Abdelhakim Belhay, ya alejado del discurso salafista radical del GCIL; este grupo ha evolucionado doctrinal y estratégicamente en los últimos veinte años, y se ha aliado con reputadas figuras religiosas y sectores piadosos más moderados (Mahmoud Hamza, o Mansour Saif Al-Nasar). A pesar de que el partido se encuentra oficialmente implantado en 27 ciudades de todo el país, no logra

hacerse con ningún asiento nominal, aunque 5 diputados independientes le son próximos. Otras figuras independientes asociadas al salafismo del GCIL que consiguen escaños son Abdelwahab Qadi por Murzuq, Salah Badi de Misrata, o dos comandantes de brigadas en Zawiya. Otros independientes mantienen posiciones políticas intermedias entre los HM y el salafismo, como el diputado Mohammed al-Walid escogido por la localidad de Zliten (Lecher, 2013: 7).

Para interpretar los resultados de las elecciones se debe ser cauto y tener en cuenta diversos factores. En primer lugar, la indeterminación en la adscripción de los 120 diputados independientes, algunos de ellos próximos, como ya se ha dicho, a partidos islamistas que los han apoyado en la campaña. En general son figuras locales prominentes, y en menor medida personalidades de alcance nacional.

En segundo lugar, como se verá, la referencia generalizada de todos los grupos al islam como componente fundamental de la futura legislación libia, y como componente ideológico presente en todos los programas, si bien con diferentes matices.

En tercer lugar, todos los partidos políticos se benefician de la imagen de grupos de oposición perseguidos por el régimen, lo que dificulta la legitimación exclusiva del islam político como baluarte de la resistencia y complica su diferenciación en un contexto de desconocimiento por la opinión pública de sus líderes.

En este repaso de los diferentes sectores del islam político, y ya fuera de la competición electoral, se encuentra la generación salafista más joven formada en el Afganistán e Irak posteriores a los ataques en territorio estadounidense del 11S y de la invasión irakí, y con un número importante de miembros que son devueltos a Libia por EEUU o Reino Unido. Estos sectores se muestran mayoritariamente contrarios al proceso democrático y constituyente, no participando en los comicios. Sus dirigentes han sido líderes de brigadas combatientes sobre todo en el este del país. Parte de estos sectores más radicales no se ha desmovilizado tras la guerra civil internacionalizada, y está vinculada, junto a otros sectores no islamistas, con la continuación de la violencia posbélica. Esta violencia ha sido especialmente virulenta en el sur del país (en las localidades de Sebha y Kufra) y en los bastiones de los partidarios del régimen depuesto (Sirte y Bani Walid). Asimismo, grupos armados han efectuado diferentes acciones violentas en la región de Cirenaica. Ahora bien, solo una parte de dicha actividad armada está vinculada con grupos adscritos a la ideología islamista. El proceso de desmovilización y desarme iniciado por el CNT en enero de 2012 ha conseguido solo en parte integrar a las milicias en el nuevo ejército nacional (Haddad, 2013; Martínez, 2013).

Entre los grupos salafistas asociados a brigadas y milicias⁴ destaca Ansar al charía de Bengasi, creado en abril de 2012 por sectores radicales de la Brigada de los Mártires de Abu Salim que rechazan integrarse en los Comités de Seguridad Suprema (CSS) del Ministerio del Interior. Entre sus líderes destaca su emir Mohamed al-Zahawi, y el responsable de su Comité Religioso, Nasser al-Tarshani. Otro grupo Ansar al charía, independiente del anterior, actúa en Derna, liderado por Sufian Bin Qumu, quien fue prisionero de Guantánamo hasta 2008. Debe destacarse también la acción de las brigadas Sheij Omar Abdul Rahman, a las que se ha relacionado con ataques a iglesias y cementerios cristianos, contra los consulados

estadounidense y británico en Bengasi o con el asesinato del embajador estadounidense en Libia en septiembre de 2012. La Brigada de los Mártires de Abu Salim, con base en Derna, es dirigida por Muhamed Bilal, y fue fundada por figuras históricas del GCIL, entre ellas Abdulhakim al-Hassadi y Salim Derby, que posteriormente se alejan de ella.

Las élites islamistas en la nueva República de Libia

Tras las elecciones, el Congreso General de la Nación (CGN) es presidido por figuras cercanas a la veterana formación de oposición Frente Nacional (FN). Este liderazgo es ejercido a pesar de que el FN obtiene únicamente 3 escaños. Desde agosto de 2012 el CGN es presidido por Mohamed Yusef al-Magarief, que se manifiesta partidario de un estado secular que no entre en contradicción con la *sharía*, y que debe retractarse reconociendo su falta de atribución para fijar los principios constitucionales. En septiembre de 2012 Abu Shugur es escogido primer ministro interino en segunda vuelta frente a Mahmud Yibril. El candidato del PJC, el ministro de Electricidad Awad Barasi, consigue poco más de 40 votos en las dos rondas, tras las negociaciones infructuosas entre su partido y la AFN para unir filas.⁵ Abu Shugur es pronto destituido, el 7 de octubre, por no haber conseguido formar un Gobierno de confianza y substituido provisionalmente por Abdurrahim al-Kib. No es hasta la llegada de Alí Zeidán, antiguo miembro del Frente Nacional, y la aprobación de su gabinete en octubre de 2012 que la institución adquiere una mayor estabilidad.

El gabinete gubernamental del primer ministro interino Ali Zeidán cuenta desde un primer momento con responsables procedentes tanto de la Alianza de fuerzas nacionales como del Partido Justicia y Construcción (ARC, 2013: 20). Esta decisión responde fundamentalmente a la alta fragmentación de los resultados electorales. La constitución de un amplio gobierno de coalición, de una treintena de ministros, no neutraliza la competición circular entre las élites por la acumulación del poder. En diciembre de 2012 Zeidán despojó de buena parte de sus atribuciones al secretario de Estado de Vivienda Ali Hussein al-Sharif, asociado a los Hermanos Musulmanes. La importancia clave del posicionamiento en instituciones puede observarse también en la renuncia del ministro de Asuntos Religiosos, de adscripción sufí, Abdessalam Abusaad, por presiones de sectores salafistas poco después de su nombramiento (Varvelli 2013: p. 8). A finales de 2013 el vicepresidente del Gobierno procedente del PJC dimite aduciendo motivos personales. Los cambios de carteras han sido constantes desde la creación del nuevo Gobierno.

Durante el 2013 el PJC ha estado presente en cinco carteras ministeriales (Electricidad, Petróleo, Vivienda, y Economía y Deportes) y se muestra partidario de mantener el actual Parlamento hasta que se apruebe la nueva Constitución y se convoquen elecciones. A pesar de ello, el partido de los Hermanos Musulmanes ha desarrollado un discurso de alejamiento con respecto a la política gubernamental, considerada deficitaria y falta de una estrategia general.

La aprobación de la Ley de Aislamiento Político en mayo de 2013 muestra igualmente la pugna por hacerse con la legitimidad que emana del combate revolucionario. Una comisión

de normas oficiales públicas (POSC) determina la idoneidad de candidatos a ejercer cargos públicos de importancia. Mohamed Magarief se verá obligado a dimitir,⁶ y será sustituido por el candidato apoyado por el PJC Nuri Ali Abu Sahmain perteneciente a la minoría amazig, escogido en segunda vuelta frente a Sharif Al-Wafi Muhamed (96 votos a 80).⁷ También el diputado del PJC por Sebha, Mohamed Arish, será sancionado.

Los continuos asaltos a la AGN y el breve secuestro durante el mes de octubre de 2013 del primer ministro por una milicia de la Agencia Contra el Crimen (ACC) dependiente del Ministerio del Interior, actualmente controlado por sectores afines al PJC de los HM, muestra el difícil equilibrio, y la importancia del sector securitario sobre las decisiones políticas. Zeidán acusa a dos parlamentarios independientes de estar tras el secuestro (uno de ellos, Mohamed al-Kilani, considerado un islamista radical). Tras estos acontecimientos, el dirigente del PJC, Mohamed Sawan, pide la renuncia de Zidán por su mala gestión. Las tensiones son visibles igualmente en la salida temporal de la AFN del CGN en protesta por el retraso en la redacción de la nueva Constitución y la falta de seguridad para los parlamentarios.⁸ Por otra parte, los juicios por difamación han sido constantes. Uno de los casos con mayor eco ha sido el levantamiento de la inmunidad a tres diputados, dos independientes y uno de la AFN, que habían afirmado que el PJC vendía petróleo ilegalmente a los HM.

A nivel local, la pugna entre las élites islamistas ha sido especialmente visible en el este del país, donde la presencia de las milicias de adscripción islamista o salafista ha sido contestada por alianzas de sectores independientes o de adscripción ideológica difícil de determinar (élites locales de origen religioso, tribal, etc.). Estructuras políticas y sociales de carácter tribal, regional, islámico, civil o étnico se superponen y colisionan, con diferentes concepciones del gobierno y de la administración Hüsken, 2012).

En cuanto al programa islamista vinculado con las reivindicaciones de las revueltas y el proyecto de nuevo régimen político, este intenta diferenciarse de otras corrientes políticas, con poco éxito. El 4 de diciembre de 2013 el Parlamento votó a favor de consagrar la ley islámica como fuente principal de derecho y «por encima» de la Constitución.⁹ Ello implica la necesidad de revisión de todas las leyes para adaptarlas a la ley islámica, especialmente aquellas que se refieren a los códigos civil y penal, pero también a las finanzas públicas o al sector bancario.¹⁰ Esta decisión se ha tomado con anterioridad a la elección de un comité constituyente que debe redactar la nueva Carta Magna. Debe recordarse que la Constitución interina fue modificada en marzo de 2012 para establecer que dicha comisión estaría integrada por miembros externos a la AGN. El Comité debe estar integrado por sesenta miembros que representarán de forma equitativa las tres grandes regiones del país: la Cirenaica, el Fezzán y la Tripolitana.¹¹ En febrero de 2013 se establece la elección por sufragio universal de la comisión. Un comité de 15 miembros formado el 15 de abril de 2013 redacta por su parte la ley que regula la elección de la Comisión Constituyente.

La decisión del CGN de establecer la *sharía* como fuente principal de derecho priva a los sectores islamistas de un importante recurso en el combate por la legitimidad religiosa. Muestra de la pugna por el capital simbólico religioso es la declaración emitida por Ansar al-charía a principios de diciembre de 2013 criticando la decisión del CGN de adoptar la *sharía* como fuente de derecho, calificándola de papel mojado al no contener un compromiso, y

comparando la decisión con la política de Gadafi que identificaba a nivel discursivo el Corán como ley de la sociedad, sin que esto tuviera consecuencias prácticas.¹²

Antes de esto, cuando se hizo público el texto de la Declaración Constitucional interina el 3 de agosto de 2011, este fue contestado por diferentes sectores islamistas y del islam más ortodoxo que consideraron que el islam debía ser la única fuente de derecho, y no únicamente «la principal» junto a otras (Sawani, 2012). Dos meses más tarde, el entonces presidente del CTN, Mustafá Abduljalil, opinó que las nuevas leyes deberían ajustarse a la *sharía*. Un año más tarde, en octubre de 2012, centenares de personas cercanas a Ansar al Charía se reunieron en la mezquita Ansar de Bengazi para establecer la Asamblea islámica para la *charía* para promover su completa aplicación.¹³ En noviembre, Dar al-Ifta, la máxima autoridad religiosa en Libia que emite fetuas oficiales, recuerda que cualquier ley que vaya contra la ley islámica debe ser declarada nula (Pargeter, 2013: 4). Tal y como ya se ha explicado, existe un substrato simbólico compartido entre grupos de diferente adscripción ideológica con respecto al papel que debe jugar el islam en el nuevo sistema político libio. En general, los estamentos religiosos oficiales han coincidido con los sectores islamistas en su reivindicación de la ley religiosa como eje de la nueva Constitución.¹⁴ Ahora bien, mientras que existe un amplio consenso sobre la necesidad de que el islam sea un pilar relevante del nuevo edificio legislativo, existen divergencias sobre el nivel de aplicación de la ley islámica.¹⁵

Por otra parte, fuera de los cauces oficiales de la parlamentarización y la formación de partidos políticos, se observa la colaboración entre grupos islamistas y las autoridades a nivel nacional y local. Las autoridades intentan aprovechar la legitimidad a nivel local y los recursos de las diferentes milicias y brigadas formadas durante la contienda civil a través de su integración en el Ejército nacional o en diferentes instituciones de seguridad. Así pues, se busca su ingreso en el Comando de Seguridad Suprema (CSS) del Ministerio del Interior, integrado por unos 100 000 combatientes de forma paralela (a veces coordinada) a la policía, o en las Fuerzas Escudo Libias (FEL), una coalición de brigadas creadas en el este del país en marzo de 2012, paralela al Ejército nacional (ICG, 2013: 94). En muchos casos esto no implica su disolución, sino que preserva su presencia y les otorga una cobertura oficial (Wehrey, 2012; Lefevre, 2013: 376). Un ejemplo de esta colaboración es la Conferencia sobre seguridad celebrada en enero de 2013 en Bengasi entre sectores tan dispares como el Consejo Local, la Asociación Libia de Predicadores de Mezquita y el Comité de Asuntos de los Combatientes, junto a cuerpos de seguridad local y diferentes brigadas, incluyendo sectores salafistas (Ansar al *charía*, o la Brigada de los Mártires Abu Salim). Los acuerdos alcanzados en esta reunión (implantación de la *sharía*, ataque a los sectores laicos que se manifiestan los viernes, etc.) muestran la alianza estratégica en muchas partes del país con unos objetivos de corto plazo (Pargeter, 2013: 4). Funciones como la de la vigilancia de fronteras e infraestructuras (aeropuertos, hospitales, etc.) han sido asignadas en ocasiones a milicias con una gran autonomía de acción (HSPI, 2013: 5). En otras ocasiones se acusa al CSS y a las FEL de dejar hacer a las milicias que actúan sin control, especialmente en la capital y en la región noroccidental (por ejemplo con respecto al ataque a centros de devoción sufíes en Trípoli, Misrata y Zliten a finales de 2012 que no fueron protegidos por la brigada Fadallah al-Shehati del CSS) (Lefevre, 2013: 377). Más aún, otras fuentes hablan incluso de control del CSS por las brigadas revolucionarias (ICG, 2013: 13).

Conclusiones

Las revueltas de 2011 suponen una oportunidad para los sectores adscritos al islam político para posicionarse en vistas a la sustitución de las viejas élites, y la ampliación y profundización de la participación en el espacio público. Se ha revertido pues la situación en la que los militantes islamistas no formaban parte de las élites primarias o secundarias. Los actores del islam político se han convertido en ineludibles en los nuevos procesos de decisión en materia política, social, económica o ideológica. A pesar de ello, y a diferencia de otros países de la región, los diferentes sectores han demostrado su incapacidad de articular un gran movimiento islamista con capacidad de representación de una mayoría de la población, por diferentes causas que ya han sido analizadas.

Ahora bien, los sectores heterogéneos del islam político han podido acceder a recursos de poder que hasta este momento les habían sido vetados (carteras ministeriales, cargos parlamentarios, nuevos órganos de prensa, acceso al capital exterior, etc.). Asimismo, la liberalización del campo político ocurrida tras la caída del anterior régimen ha permitido el ejercicio de nuevas formas de acción política y social. Los grupos islamistas han podido iniciar acciones para proveer de servicios sociales a la población necesitada allí donde el Estado no ha podido llegar por circunstancias coyunturales. En este sentido, múltiples fuentes hacen referencia a la relevancia de acciones de este tipo a través de redes caritativas, incluso por parte de grupos salafistas armados, que combinan su acción en el campo de la seguridad con acciones como el reparto de alimentos o la creación de centros de salud (véase por ejemplo la acción de Ansar al charía en Bengasi, donde controlan la gestión de una clínica) (HSPI, 2013: 13). Esto se realiza en muchas ocasiones a través de la colaboración con las autoridades locales, lo que muestra la heterogeneidad de los actores del islam político y la complejidad de los lazos establecidos con las autoridades.

Por otra parte, se ha hecho evidente la relevancia de la competición por hacerse con el capital simbólico de la legitimidad religiosa. Ante la imposibilidad de acceder a recursos de poder relevantes (el Estado, el capital, la beneficencia, el mundo asociativo, los medios de comunicación, las redes oficiales religiosas y mezquitas, etc.) durante la Yamahiriya, los grupos islamistas desafiaron a las élites del sistema por el monopolio sobre la ideología, por un lado, y sobre la violencia, por otro. De ambos recursos el principal, sin duda, es la ideología, asociada con la movilización política de la religión y su papel en la vida política y social. Esta voluntad de convertirse en élite ideológica constituyó una verdadera competición por el poder. La ideología fue esencial en la construcción del «Estado de las masas» libio. Las nuevas élites jóvenes y desconocidas que realizaron el golpe de Estado en 1969, ante su carencia de legitimidad previa, buscaron el apoyo popular a través del discurso ideológico revolucionario, cuya verificación se vincula con el bienestar de la población. Tal y como apunta Ayoub (1987: 32), la revolución libia se caracterizó por su carácter socialista indígena enraizado en el legado árabe y la fe islámica. Para autores como Luis Martínez (2007: 98), el discurso relativo a la construcción de una sociedad justa estaba íntimamente ligado al modelo político tribal de garantía y protección por el grupo de sus miembros, y alejado de la imagen del Estado.

En cuanto a la dimensión ideológico-religiosa, poco después del golpe de Estado de 1969 realizado por el movimiento de los Oficiales Libres Unionistas liderado por Muamar al-Gadafi, este anunció una serie de medidas radicales para reislamizar la sociedad de acuerdo con la *sharii*. En realidad, únicamente en un breve período inicial se actuó en esta dirección, ya que posteriormente, coincidiendo con la redacción del *Libro Verde* en el que se desarrolla el nuevo ideario del régimen, lo que se realizó fue una interpretación no ortodoxa del islam. La religión fue apropiada en su vertiente fundamentalista como fuente de la política, alejándose de la aplicación rigurosa de la ley islámica y del literalismo. Gadafi se abrogó el derecho a la interpretación última del dogma religioso, en un acto de *iytihad* que lo alejó cada vez más de su base islámica. Para algunos autores, fue precisamente este fundamentalismo del régimen el que frenó la expansión del islamismo hasta mediados de los noventa (Burgat, 1995: 170; véase también Sfeir, 2002: 328; Brady, 2007: 112). Ahora bien, el régimen mostró bien pronto que su interés no era la construcción de un Estado y una sociedad más acordes con el islam, sino el desarrollo de un proyecto personal con otra base ideológica. El discurso islámico del régimen y su control de las fuentes de autoridad religiosa se granjearon un fuerte antagonismo de las élites religiosas tradicionales y de los sectores del islam político. En el primer caso no solamente por alejarse de la ortodoxia, sino sobre todo por marginarlos como intermediarios necesarios en la gestión de conflictos y recursos (Djaziri, 2006).

Ahora bien, la ideología no deja de ser un recurso en manos de una élite preocupada por perpetuar su poder y garantizar sus intereses, lo que explica la aplicación contradictoria y ambigua del programa que se deriva de ella (Badry, 2007: 111). En este sentido, los comités revolucionarios creados para garantizar la preservación de la ortodoxia revolucionaria derivaron rápidamente en un instrumento de control y represión de la población. Veinte años más tarde, el ideario de la Yamahiriya experimentó un serio desgaste, y la población libia comprobó con desencanto el incumplimiento de las promesas. Por su parte, los sectores islamistas encontraron terreno abonado en la progresión de una cultura consumista y hedonista, más centrada en el individuo, que desafiaba las bases tradicionales de la sociedad libia.

La experiencia libia confirma que existen límites a la instrumentalización del recurso ideológico-identitario por las élites, y debe tenerse en cuenta tanto el contexto normativo en el que se realiza este proceso como la capacidad constitutiva de dicho contexto normativo sobre las identidades, y, por lo tanto, sobre los objetivos de dichas élites. Los valores tribales, y la tradición, tal y como se perfila en esta segunda mitad del siglo XX, se ven modificados pero seguirán constituyendo una base insoslayable, o en todo caso más durable que la acción de las élites dirigentes. Intervienen aquí los engranajes de la «hegemonía cultural», en términos gramscianos, de calado más profundo (Izquierdo y Kemou, 2009: 38).

Resta por elucidar qué élites están extrayendo más réditos de la gestión del petróleo, la principal fuente de riqueza de este país rentista. Si bien las élites islamistas no parecen asociadas a este recurso (cuya gestión ha recaído en otros grupos políticos y en nuevos tecnócratas), sin duda sí se benefician de sus rentas a través del Gobierno, pero también por

las oportunidades de elitización a nivel regional y local. Asimismo, y de forma más marginal, diferentes grupos armados han intentado hacerse con el control de algunos campos petrolíferos, o han utilizado su bloqueo y el de las centrales eléctricas como instrumento de presión a favor de sus demandas.

Como se ha visto, la debilidad de las estructuras institucionales y estatales intensifica las estrategias conflictuales en la pugna por el poder. Los cambios continuos en las instituciones, la continuación del uso de la violencia como estrategia política, y la dilatación de los procesos de establecimiento de las nuevas normas y reglas del juego testimonian esta debilidad. Pero la convergencia de objetivos (vinculados con la caída del régimen) y posteriormente la entrada en el juego político reglado y la colaboración con las instituciones tiene efectos visibles en las reivindicaciones de los diferentes grupos y normaliza su imagen (conservadores en lo moral, neoliberales en lo económico). Falta por ver si la tendencia a la inclusión más o menos formal de todos estos sectores en el campo político (que incluye también la colaboración de las milicias salafistas con los representantes del Estado) comportará la aceptación de las reglas del juego, y hasta qué punto las élites del Estado tendrán éxito en controlar espacios alternativos de poder a nivel territorial.

Bibliografía

AHMIDA, Abdullatif (1994): *The Making of Modern Libya: State Formation, Colonization and Resistance*, Washington, SUNY Press.

ANDERSEN, Louise Riis (ed.) (2013): *How the Local Matters: Democratization in Libya, Pakistan, Yemen and Palestine*, DIIS Report, n.º 1, disponible en (http://www.diis.dk/files/publications/Reports2013/RP2013-01-How-the-local-matters_web.jpg.pdf) [consulta: 13 de octubre de 2013].

ANDERSON, Lisa (1990): «Tribe and State: Libyan Anomalies», en KHOURY, Philip S.; KOSTINER, Joseph (eds.): *Tribes and State Formation in the Middle East*, Los Ángeles, Berkeley, pp. 288-302.

AL-TIR, Mustafa Umr: «Taḥaddiyāt al-Taḥawwul ilā al-Dimuqrāṭi yah fi Libyā». *Ṣaḥifat al-Waṭa n al-Libiyā al-ʿIlktrūniyah*, 23 de septiembre de 2011, disponible en <http://www.alwatan-libya.com/more.asp?ThisID=16855&ThisCat=22/> [consulta: 13 de noviembre de 2013]. .

ARC. Asylum research Consultancy: *Libya Country Report*. Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 5 de Julio de 2013, disponible en <http://www.refworld.org/docid/51de77c24.html> [consulta: 12 de octubre de 2013].

AYOUB, Mahmoud (1987): *Islam and the Third universal Theory: The Religious thought of Muammar al-Qadhafi*, Londres, KPI.

BADRY, Roswitha (2007): «¿Subordinación a los intereses políticos o un islam libio? El sinuoso curso de la visión islámica de Gadafi», en DE LA PUENTE, Cristina; SERRANO, Delfina (eds.): *Activismo político y religioso en el mundo islámico contemporáneo*, Madrid, Siglo XXI, pp. 107-130.

BENSTEAD, Lindsay et al. (2013): *Believing in Democracy: Public Opinion Survey in Libya*. Washington, DC: JMW Consulting, National democratic Institute.

BURGAT, François (1995): *L'islamisme au Maghreb. La voix du sud*, París, Karthala.

CHERSSTICH, Iгоре: «Libya's revolution: tribe, nation, politics». Open Democracy, 2011, disponible en <http://www.opendemocracy.net/igor-cherstich/libyas-revolutiontribe-nation-politics/> [consulta: 10 de diciembre de 2013].

DAGUZAN, Jean-François; MOISSERON, Jean-Yves (2011) : «La Libye après Kadhafi: essai de prospective géopolitique du conflit libyen», en *Hérodote*, vol. 3, nº 142, pp. 78- 97.

DAVIS, John (1990): *Le système libyen: les tribus et la révolution*, París, PUF.

DEEB, Marius K. (1996): «Militant Islam and its critics: The case of Libya», en: RUEDY, John (ed.): *Islamism and secularism in North Africa*, Houndmills, Macmillan, pp. 45-62.

DJAZIRI, Moncef (marzo de 2006): «Clivages partisans et partis politiques en Libye» en *Revue des mondes arabes et musulmans et de la Méditerranée*, vol. 2, nº 111-112, pp. 76-85.

EL-KIKHIA, Mansour O. (1997): *Libya's Qaddafi. The politics of contradiction*, Gainesville, University Press of Florida.

FELIU, Laura (2013): «Islam político en Libia: elitización y vanguardia », en IZQUIERDO, Ferran (ed.) : *El Islam político en el Mediterráneo. Radiografía de una evolución*, Barcelona, CIDOB, Bellaterra, pp. 233 – 268.

HADDAD, Saïd (2013): «La sécurité, "priorité des priorités" de la transition libyenne», en *L'Année du Maghreb*, vol. IX, pp. 113-126.

HSPI. Homeland Security Police Institute: *Origins and Dimensions of Instability in Post-Qaddafi Libya*. HSPI Issue Brief 21, 30 de julio de 2013, disponible en <http://www.gwumc.edu/hspi/policy/HSPI%20Issue%20Brief%2021%20Instability%20Post-Qaddafi%20Libya.pdf> [consulta: 2 de octubre de 2013].

HÜSKEN, Thomas: *Tribal Political Culture and the Revolution in the Cyrenaica of Libya*. Comunicación presentada en la Conferencia « Libya from révolution to a State Bulding Challenges of the Transitional period », Doha, 7-8 de enero de 2012. The Libyan Centre for Studies and research.

ICG. INTERNATIONAL CRISIS GROUP: *Divided We stand: Libya's Enduring Conflicts*, 14 de septiembre de 2013, disponible en <http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/libya/130-divided-we-stand-libyas-enduring-conflicts.aspx> [consulta: 22 de octubre de 2013].

IZQUIERDO-BRICHES, F. & LAMPRIDI-KEMOU, A. (2012): «Sociology of power in today's Arab world», en IZQUIERDO BRICHES, F. (ed.): *Political Regimes in the Arab World*, London & New York, Routledge, pp. 12-23.

JURADO ANAYA, Jesús (2012): «La "Seconde Jamahiriyya" libyenne: l'échec d'une stratégie de survie», *L'Année du Maghreb*, vol VIII, pp. 207-218.

KOHLMANN, Evan F.; LEFKOWITZ, Josh (2007): «Dossier: Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)». The Nefa Foundation (octubre), disponible en <http://www.nefafoundation.org/miscellaneous/nefalifg1007.pdf> [consulta: 12 de octubre de 2013].

LACHER, Wolfram: *Fault Lines of the Revolution, Political Actors, Camps and Conflicts in the New Libya*, German Institute for International and Security Affairs, SWP Research Paper nº 4, 2013, disponible en http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP04_lac.pdf [consulta: 2 de diciembre de 2013].

LEFEVRE, Raphael (2013): «Commentary on current events in North Africa», en *The Journal of North African Studies*, vol 18, nº 2, pp. 373-377.

MARTÍNEZ, Luis (2007): *The Libyan Paradox*, Nueva York, Columbia University Press.

MARTÍNEZ, Luis (Julio de 2013): «Une transition à l'épreuve du legs de la Jamahiriyya », en *Les Etudes du CERI*, nº 195, pp. 21-32.

McQUINN, Brian: *Armed Groups in Libya: Typology and Roles*. Small Arms Survey research Notes, nº 18, junio de 2012, disponible en http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-18.pdf [consulta: 27 de octubre de 2013].

OBEIDI, Amal (2008): «Political Elites in Libya Since 1969», en: VANDEWALLE, Dirk (ed.): *Libya Since 1969. Qadhafi's Revolution Revisited*, Nueva York, Palgrave Macmillan, pp. 105-126.

OUANNES, Moncef, «Chronique politique en Libye», febrero de 2000, disponible en <http://www.youscribe.com/catalogue/presentations/chronique-politique-en-libye-moncef-ouannes-373137> [consulta: 12 de octubre de 2013].

PARGETER, Alison (2013): «Islamist Militant groups in Post-Qadhafi Libya», *CTC Sentinel*, vol. 6, nº 2, febrero de 2013, disponible en <http://www.ctc.usma.edu/posts/islamist-militant-groups-in-post-qadhafi-libya> [consulta: 12 de diciembre de 2013].

RONEN, Yehudit (2008): *Qaddafi's Libya in World Politics*, Boulder, Lynne Rienner.

SALEM, Paul y KADLEC, Amanda: *Libya's Troubled Transition*, The Carnegie Papers, junio de 2012, disponible en <http://carnegieendowment.org/2012/06/14/libya-s-troubled-transition/bzw4> [consulta: 12 de octubre de 2013].

SAWANI, Youssef Mohammad (2012): «Post-Qadhafi Libya: interactive dynamics and the political future», en *Contemporary Arab Affairs*, vol. 5, nº 1, pp. 1-26.

SFEIR, Antoine (dir.) (2002): *Dictionnaire mondial de l'islamisme*, París, Plon.

ST JOHN, Ronald Bruce (2011): *Libya: Continuity and Change*, Londres y Nueva York, Routledge.

TAKEYH, Ray (2000): «Qadhafi's Libya and the Prospect of Islamic Succession», *Middle East Policy*, vol. 7, nº 2, pp. 154-164.

VANDEWALLE, Dirk J. (2006): *A history of modern Libya*, Cambridge, Cambridge University Press.

VANDEWALLE, Dirk J. (ed.) (2008): *Libya since 1969. Qaddafi's revolution revisited*, Nueva York, Palgrave Macmillan.

VARVELLI, Arturo: *The role of tribal dynamics in the Libyan future*, ISPI Analysis, n. 172, mayo de 2013, disponible en http://www.ispionline.it/sites/default/files/publicazioni/analysis_172_2013.pdf [consulta: 12 de octubre de 2013].

WEHREY, F. M.: *The Struggle for security in eastern Libya*. Carnegie Endowment for International Peace, 11 de septiembre de 2012, disponible en <http://carnegieendowment.org/2012/09/19/struggle-for-security-in-eastern-libya/dvct> [consulta: 11 de diciembre de 2013].

ZOUBIR, Yahia H. (2008): «Contestation islamiste et lutte antiterroriste en Libye (1990-2007)», en *L'Année du Maghreb*, vol IV, pp. 267-277.

¹ Ver el Informe de Human Rights Watch (<http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2006/06/28/libya13636.htm>) [consultado el 12 de septiembre de 2012].

² El Consejo del Mando de la Revolución (CMR) fue vaciándose de miembros y perdiendo relevancia. A finales de los años noventa los comités revolucionarios contaban con unos 10

000 miembros, a los que se debe añadir unos 40 000 de la Guardia Nacional. Los oficiales de estos cuerpos pertenecían mayoritariamente a la tribu gadafa.

³ El CNT aprobó una ley en abril de 2012 por la que prohíbe los partidos de base religiosa, étnica o tribal, que debido a las protestas fue anulada al mes siguiente (Andersen, 2013: 40).

⁴ McQuinn (2012) identifica cuatro categorías de grupos armados: a) las brigadas revolucionarias que se inician como grupos combatientes revolucionarios en 2011, que establecen consejos y uniones formales, y que tanto pueden corresponder a la coordinación a nivel de un barrio, como de un lugar de trabajo, etc.; b) las brigadas no reguladas, que se escinden de las anteriores; c) las brigadas posrevolucionarias, creadas en un principio en barrios dominados por partidarios de Gadafi, y que aumentan sus acciones a medida que se desarrolla la guerra y se mantienen activas actualmente en ciudades como Zuwara; y d) las milicias, que McQuinn asocia a grupos salafistas (y a, sin justificar la relación, el crimen organizado).

⁵ *Libya Herald* 12/09/2012 (<http://www.libyaherald.com>).

⁶ *Libya Herald* 25/06/2013 (<http://www.libyaherald.com>).

⁷ *Libya Herald* 25/06/2013 (<http://www.libyaherald.com>).

⁸ BBC «Libya's liberal ANF Group boicots national assembly», (7/01/2013) <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20935871>.

⁹ *Libya Herald* 08/12/2013 (<http://www.libyaherald.com>).

¹⁰ Ya con anterioridad a esta decisión, el Ministerio de Justicia había previsto la creación de un comité de revisión de la legislación actual integrado por 16 personas nombradas por el Tribunal Supremo y el Gran Muftí. Tras la caída del régimen de Gadafi algunas leyes ya han sido abolidas, como la ley que restringía la poligamia,

¹¹ Esta reforma en la representación territorial tiene su origen en las demandas de mayor autonomía por parte de diferentes actores políticos y sociales en la Cirenaica. En marzo de 2012 diferentes líderes de Bengasi proclaman la autonomía de la región. También se solicita una distribución equitativa de los asientos del CNG (actualmente son 106 para la región occidental, 60 para el Este y 34 para el Fezzán) (Salem y Kadlec, 2012).

¹² *Libya Herald* 08/12/2013 (<http://www.libyaherald.com>).

¹³ «Ansar al-Shari'a in Lybia: Putting Weapons Aside in Favor of Political Involvement», *Libya al-Mostakbal* (14/10/2012).

¹⁴ Ver en este sentido las declaraciones de la Casa de la Fetua en noviembre de 2012 o las declaraciones del Gran Mufti Gaiz al-Fajri relativas a la necesidad de introducir progresivamente a las reivindicaciones de los sectores islamistas (Pargeter : 4).

¹⁵ Una encuesta realizada por JMW Consulting y el National Democratic Institute en agosto de 2013 establece que un 37% de los encuestados están a favor de que la *sharía* sea la primera fuente de la legislación en la futura Constitución, un 35% que debe ser la única fuente de legislación, y un 21% que debe ser una fuente entre otras. Únicamente un 2% se manifestaba en contra de la presencia de la *sharía* en la nueva Carta Magna (otro 5% no sabe) (Benstead 2013: 14).